actual ha crecido nuestra voluntad y nuestro perentorio propósito en el sentido de procurar un entendimiento entre los hombres y los pueblos.

Hablo en nombre de una nación que tiene sólidas instituciones y adelantadas leyes sociales y traigo a vosotros las ideas democráticas y la firmeza en la lucha por la libertad, hablando en nombre de un país del sur de América, y pido a todos los que están aquí, y tienen en sus manos

tan terrible responsabilidad, el hacer lo necesario para llegar a la pacificación de los espíritus que es indispensable para la paz del mundo.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Como nadie más ha pedido la palabra, voy a levantar la sesión. La Mesa de la Asamblea General se reunirá hoy a las 15 horas. La Asamblea General se reunirá mañana a las 11 de la mañana.

Se levanta la sesión a las 12.52 horas.

8ªa. SESION PLENARIA

Celebrada en Flushing Meadow, Nueva York, el jueves 18 de septiembre de 1947, a las 11 horas

Presidente: Sr. O. ARANHA (Brasil).

10. Debate general (*continuación*)

El PRESIDENTE (*traducido del francés*): Tiene la palabra el representante de Chile.

Sr. MAZA (Chile): Señor Presidente, señores representantes, correspóndeme el alto honor de exponer ante esta Asamblea democrática de las naciones del mundo, unidas en la empresa común del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, las líneas generales que inspiran la política exterior de la República de Chile en estas horas decisivas para nuestra civilización.

El pueblo de Chile, a lo largo de toda su historia republicana, puede ostentar con el más legítimo orgullo los títulos que acreditan sus profundas convicciones democráticas, su solidez institucional fundamentada en el derecho y la justicia social, su permanente respeto a todas las libertades y garantías individuales y su constante defensa de la dignidad humana.

Estos principios, proyectados en el campo internacional con criterio sereno y realista, se traducen necesariamente en un ancho espíritu de cooperación, en un leal deseo de contribuir en la medida de nuestras fuerzas a toda iniciativa que tienda a reforzar la fraternal solidaridad de los pueblos y a salvaguardar los valores culturales, único medio de legar a las generaciones venideras ese mundo más feliz a que tienen derecho.

Por tales razones, Chile ha aportado siempre su desinteresado concurso en todas las sesiones y organismos internacionales de carácter mundial y se ha esforzado por contribuir a la unidad de las naciones del Hemisferio Occidental, vivificando los eslabones que las unen con su acción directa y su sentido de hermandad continental y cooperando con todas ellas en esa identificación de angustias y esperanzas que se ha vertido en positivas manifestaciones de confraternidad, en reales conquistas comunes como las obtenidas en las últimas Conferencias de Cancilleres americanos y, muy especialmente, en el Acta de Chapultepec y en su reciente complementación con el Pacto para la seguridad y defensa del Hemisferio suscrito en Río de Janeiro.

Los ideales americanos, que enriqueciera genialmente el gran Presidente Roosevelt con su política de buena vecindad, son los nuestros y, por ello, nos hemos empeñado en que se tradujesen en expresiones concretas en el orden internacional y representaran efectivamente la voz del mundo que nace.

De estas conquistas americanas, acaso la de mayor significación e importancia para el pueblo chileno, sea el nuevo y trascendental sentido que hemos impreso a la democracia. Se la ha despojado, en efecto, de su significado meramente intelectual o político para vitalizarla, al margen de fórmulas rígidas, con un cabal concepto humano, con el respeto de la condición del hombre, de todas las ideas y de la igualdad social; respeto que, en el plano internacional, se convierte en el derecho a vivir sin temor y en la sincera defensa de la paz.

Tales son, señores representantes, el mensaje y la misión que nos ha tocado en suerte. Fiel a ellos, Chile suscribió la Carta de las Naciones Unidas que cristalizaba idénticos ideales y hemos reiterado, una y otra vez, nuestra fe incommovible en los principios que la inspiran, en los derechos fundamentales del hombre, en la igualdad jurídica de las Naciones, en el respeto absoluto a la palabra empeñada, en la tolerancia y convivencia pacíficas.

Guardando fidelidad a estos principios, Chile coincide con el pensamiento del Presidente Roosevelt "en que la esperanza para un mundo de paz y progreso dependerá de la buena voluntad y del acierto de las naciones amantes de la paz, grandes y pequeñas, que asuman una responsabilidad proporcionada con sus capacidades individuales, para trabajar juntas por el mantenimiento de la paz y la seguridad".

Fiel a ellos, el Presidente de Chile, Sr. Gabriel González Videla, ha expresado en ocasión reciente que "la política internacional de Chile es de colaboración leal y desinteresada al mantenimiento de la paz".

Chile considera que esta Organización de las Naciones Unidas constituye la única posibilidad de alejar del mundo el flagelo de una nueva guerra y de otorgar a los pueblos aquellas cuatro libertades por las cuales se luchó en los campos de China, en las estepas rusas, en los desiertos africanos, en las islas del Pacífico, en las playas de Normandía.

Chile estima, por fin, que al suscribir la Carta de San Francisco asumió una responsabilidad ineludible en la ardua tarea de estructurar un mundo nuevo, basado en la justicia social y en la solidaridad de los hombres, tarea que sólo será posible si se mantiene, en este difícil período de postguerra, la acción conjunta y victoriosa que

las grandes Potencias supieron imprimir en los momentos más difíciles de la última contienda.

Mi Gobierno desea representar ante esta Asamblea la urgente necesidad de obtener la estabilidad y el desarrollo económicos de las naciones que, directa o indirectamente, sufren las consecuencias de la reciente conflagración o se enfrentan a inmensos y gravísimos problemas en el orden financiero, industrial, agrícola y comercial.

La independencia y seguridad políticas, tanto externa como interna, deben sustentarse en la tranquilidad económica que otorga a los hombres y a los Estados posibilidades dignas de existencia.

El mantenimiento de la paz requiere la superación de la actual crisis mundial. No se puede hablar ya de solidaridad política sin preocuparse fundamentalmente de lo económico.

La cooperación en el orden económico es absolutamente necesaria para los pueblos de América, y entendiéndolo así, el Gobierno de Chile, por intermedio de su representante ante el Consejo Económico y Social, planteó la conveniencia de crear una Comisión Económica para la América Latina destinada a estudiar y resolver su precaria situación actual.

El panorama económico de la América Latina presenta, en general, un conjunto de países de economía colonial, productores de materias primas, faltos de capitales, escasamente industrializados y poblados, con un bajo nivel de vida. Estas condiciones — seriamente agravadas por los efectos de la guerra — y que revisten acentos más trágicos en algunas naciones que en otras, significan un grave obstáculo para la seguridad continental y, por ende, para la misma recuperación económica del mundo. Significa, además, un peligro latente para la supervivencia de los regímenes democráticos. Las ideas desquiciadoras del orden constitucional y jurídico nutren su fuerza en la postración económica.

Esta dramática situación de los países latinoamericanos, que inspiró la proposición chilena, ha sido expresamente reconocida por el Consejo Económico y Social, el que ha creado un mecanismo preliminar para el establecimiento de la Comisión Económica para América Latina. Al mismo tiempo, la resolución del Consejo ordena al Secretario General efectuar de inmediato estudios acerca de los problemas que amenazan la estabilidad y el desenvolvimiento de los países de Latinoamérica.

Nuestra delegación se complace del éxito alcanzado y tiene fe en que los organismos respectivos desarrollarán la labor rápida y efectiva que signifique una pronta cristalización de nuestro anhelo que comparten todos los pueblos latinos de América.

La conveniencia de racionalizar y coordinar las economías de los países del Hemisfero Occidental — superando esas condiciones desfavorables, creando mercados más seguros de consumo interno, utilizando industrialmente las propias materias primas y facilitando la concentración de capitales — inspira nuestra política comercial.

Esta es la explicación de los motivos por los cuales Chile ha ampliado su anterior política de pactos basados exclusivamente en concesiones mutuas. Abogamos, ahora, por convenios de mayor alcance que puedan significar complementación de las economías y mercados más vastos que los

existentes. Los mismos motivos justifican nuestra posición en el Consejo Económico y Social y tienen la más alta importancia para la nueva estructura económica del mundo.

Tales son, señores representantes, los principios fundamentales que orientan la actitud internacional de Chile.

Somos un pueblo de hombres libres que vive y siente la democracia, que no persigue a nadie por sus ideas, que dedica sus esfuerzos al trabajo en la libertad y que, en el plano internacional, ofrece su leal cooperación a todas las naciones para defender la paz y la seguridad mundiales, la igualdad jurídica de todos los Estados, el respeto de los tratados y la fundamentación de la seguridad mundial en la cooperación económica de todos los países y en el rechazo de falsas pretensiones de autarquía que sólo conducen a estériles antagonismos.

Chile considera que todas estas aspiraciones pueden realizarse concretamente mediante acuerdos generales o regionales que guarden estricta armonía con los principios que inspiran la organización de las Naciones Unidas y que constituyen un verdadero complemento de este organismo, como lo es el reciente tratado de Río de Janeiro, firmado por las naciones del Nuevo Mundo para defender la seguridad del Hemisferio.

Los países de nuestro continente han sentido el soplo vivificador de esos anhelos. Han comprendido la trascendencia y asumido la responsabilidad de las horas que vive esta civilización. En Río de Janeiro avanzaron con seguridad hacia el porvenir y convocaron a una Conferencia que habrá de abocarse, en el segundo semestre del año próximo, al estudio de las condiciones y a la solución de los problemas de carácter económico que nos agobian.

Semejantes acuerdos regionales, al contribuir a la labor de las Naciones Unidas, al ceñirse a las normas estatuidas en la Carta de San Francisco, no significan, de manera alguna, la formación de bloques regionales de carácter político que Chile siempre ha repudiado porque tienden a debilitar la acción común, a obstruir la comprensión recíproca y a sembrar recelos que son peligrosos e inconvenientes.

Señores representantes, la alta y decisiva empresa de defender la paz y seguridad internacionales exige la más efectiva cooperación, la más honda comprensión y ese abnegado desinterés que requiere la posposición de los conflictos pequeños y de la mera conveniencia individual de las naciones.

En esta convicción, Chile formula un ferviente llamado a la buena voluntad de todos los pueblos del mundo para que, olvidadas las dificultades transitorias, consagren todas sus energías a los bienes que son comunes y permanentes.

El Gobierno de Chile no puede sino lamentar, movido por la más leal sinceridad, que la comprensión y la cooperación aparezcan hoy debilitadas y acaso empañadas por divergencias de peligrosas proyecciones.

El mundo contempla con temor y angustia esas incomprendiones y esa angustia y ese temor se traducen en un espíritu de escéptico derrotismo sobre la eficacia misma de la Organización de las Naciones Unidas, sobre su capacidad para rea-

lizar los altos fines de la Carta de San Francisco.

Ese espíritu pesimista, preciso es también reconocerlo, se ha visto fortalecido recientemente por la pugna que la opinión pública internacional cree ver producirse continuamente en el seno del Consejo de Seguridad, por el uso reiterado del veto, situación que mueve a Chile a recordar que el privilegio del veto fué concedido en la reunión de San Francisco como una verdadera demostración de confianza que las naciones más pequeñas otorgaban a las grandes Potencias, privilegio que éstas, por su parte, se comprometieron a emplear con la prudencia y discreción que permitiera conciliarlo con el principio de la igualdad jurídica de los Estados.

El hombre del mundo, agobiado hoy por un presente aciago, necesita que su destino se proyecte hacia el futuro con firmeza y esperanza, y las Naciones Unidas deben devolverle esa seguridad con la sincera colaboración de todos los países, con la superación de las incomprensiones que emergen de filosofías diferentes, con el afianzamiento definitivo de la paz y la confianza de que no se recurrirá de nuevo a las armas para defender intereses o ideologías determinadas.

Después que la humanidad ha presenciado, temblando de horror, las dos más grandes catástrofes que ha producido la guerra, aplicada como método para resolver los problemas, y después de los esfuerzos hechos a partir del Pacto Briand-Kellog, para colocar fuera de la ley el empleo de la fuerza como arma política, no debemos aceptar que la guerra, llamada por los antiguos *ultima ratio* pueda transformarse en la *prima ratio* o la *unica ratio*.

No es posible aceptar tampoco, que al determinar las nuevas bases de convivencia social, se olviden los fundamentos de la paz y los pueblos se ocupen, por el contrario, de establecer situaciones políticas y económicas favorables a una nueva guerra, toda vez que la etapa de las operaciones militares es siempre la más breve en el trágico proceso del conflicto.

Chile, señores representantes, cree interpretar el pensamiento de las naciones pequeñas, al formular este llamado a todos los pueblos del mundo para que, en una elevada demostración de su sentido histórico, devuelvan al ser humano la tranquilidad a que se ha hecho acreedor después de las angustiosas experiencias del pasado y del presente.

El PRESIDENTE (*traducido del francés*): Tiene la palabra el representante de Australia, Sr. Evatt, uno de los campeones de las Naciones Unidas, a quien deseamos muy especialmente rendir homenaje.

Sr. EVATT (Australia) (*traducido del inglés*): La presente Asamblea se reúne en un momento histórico que sólo puede ser descrito como un crepúsculo entre la guerra y la paz. Han transcurrido más de dos años desde que el Japón depuso las armas, pero todavía no se han celebrado tratados de paz ni con Alemania ni con el Japón. De modo que, aunque ya no hay guerra mundial, no puede decirse que haya vuelto la paz.

Sobre vastos territorios prevalece una situación de temor e inquietud que, no solamente es perturbadora por sí misma, sino que constituye un verdadero impedimento para la obra de esta gran

Organización. Nos encontramos, pues, frente a esta extraordinaria paradoja: la función primordial de las Naciones Unidas es mantener la paz y, sin embargo, todavía no hay paz que mantener.

En Europa, la situación política es todavía inestable y la tarea de reconstrucción económica se encuentra retardada por la incertidumbre que rodea al porvenir de Austria y Alemania. Sus recursos industriales, por supuesto, son un elemento esencial de la economía europea considerada en conjunto. Nadie sabe cuál será el nivel de producción que se permitirá a esos países en el porvenir, ni qué comercio ni qué estructura política se les permitirá mantener, o se procurará que tengan. La celebración de los tratados de paz con esos países constituye, pues, una necesidad urgente.

El ajuste de la paz con el Japón es también una necesidad urgente. Cuando eso se haya logrado, tendremos una base firme para la reconstrucción económica y política de la vasta e importantísima región del Asia Oriental y del Pacífico. Las Naciones Unidas tienen un papel importante que desempeñar en la empresa de elevar los niveles de vida en toda esa región, y en esa tarea Australia tiene un interés especial.

Sin embargo, hay razones serias para creer que un tratado de paz con el Japón será negociado en un porvenir próximo. El Gobierno australiano estima que un acuerdo relativo al ajuste de la paz en el Pacífico y en Asia no necesita esperar el ajuste de la paz en Europa. Uno de los motivos de ellos es que muchas de las declaraciones definitorias de la política aliada hacia el Japón ya han determinado los principios y muchos de los detalles del ajuste de la paz con el Japón.

En el curso de los dos últimos años, las 11 Potencias que tomaron parte en la lucha contra el Japón y que contribuyeron a la victoria en el Pacífico bajo la dirección de los Estados Unidos de América, han estado trabajando juntas en Washington como miembros de la Comisión del Lejano Oriente, para determinar la política de ocupación. Esta es una Comisión de la que no se ha oído hablar mucho. Muy pocas disputas han surgido de ella, pero está realizando una gran tarea. La política básica de esa Comisión proporcionará un bosquejo valioso para el ajuste de la paz con el Japón, así como un precedente valioso por dos conceptos, y ahora deseo recordar la observación hecha ayer por el representante de México. Se trata de un precedente que se opone a la elaboración del ajuste de la paz por un reducido número de grandes Potencias, y se trata también de un precedente en favor de la participación, en la elaboración de la paz, de todos los países, grandes o pequeños, que hicieron una contribución importante a la victoria.

Pero la actual situación turbulenta del mundo no se debe únicamente al hecho de que no haya sido posible ajustar la paz satisfactoriamente. Hasta cierto punto, la demora en la redacción de los tratados es un síntoma de la enfermedad, más bien que su causa. En Australia hemos observado con profunda inquietud la tendencia de ciertas naciones a formar grupos dominadores y bloques o uniones rígidas. Tal tendencia es enteramente contraria al espíritu de la Carta de San Francisco. La Carta afirma enfáticamente la necesidad de que haya tolerancia. Proclama como uno de sus propósitos fundamentales el respeto a los

derechos humanos y a la libertad de todos, sin discriminación o distinciones por motivos de raza, sexo, idioma o religión; por encima de todo, tiene por objeto substituir la fuerza física en este mundo con los principios de justicia eterna como fuerza determinante de las relaciones internacionales. Deberíamos tratar de volver a captar el espíritu que animó a las delegaciones de San Francisco.

En presencia de esta situación, la Asamblea General tiene hoy una responsabilidad especialmente grande. Tendrá que hacer frente a problemas algunos de los cuales no han podido ser resueltos por el Consejo de Seguridad. La Asamblea, por representar a todos los Miembros de las Naciones Unidas, es más sensible a la opinión pública del mundo que el Consejo de Seguridad. La Asamblea no debe verse obstruida por el procedimiento del veto individual.

Australia y otras Potencias medianas y menores representadas aquí, se esforzaron vigorosamente en San Francisco, hace dos años, por ampliar los poderes y la influencia de la Asamblea General. Es muy alentador volver a encontrar aquí, en esta Asamblea, a tantos de aquellos representantes. Afortunadamente para nosotros y para el mundo, la posición finalmente establecida en San Francisco para la Asamblea, da motivos de esperanza. No hay ningún motivo para que esta gran Asamblea se deje dominar por el espíritu derrotista que se ha manifestado en tantas partes a consecuencia de la incapacidad del Consejo de Seguridad para tomar decisiones.

El Gobierno australiano considera que el apoyo a las Naciones Unidas es un principio cardinal de su política exterior. ¿Y eso, por qué? En gran parte, porque cree que la Asamblea General constituye una tribuna efectiva para las discusiones internacionales, y que por ello ofrece a todos los pueblos del mundo inmensas posibilidades para la realización de sus principales deseos: el verse libres del temor a la guerra y el verse libres de la indignidad. Los pueblos del mundo están decididos a tratar de lograr esos objetivos por todos los medios posibles, si no para ellos mismos, por lo menos para sus hijos.

Trataré ahora, si se me permite, de algunos de los problemas particulares a que tenemos que hacer frente en este período de sesiones de la Asamblea.

En San Francisco, Australia se unió a otras naciones, medianas y pequeñas, para tratar de limitar el uso del veto de cada miembro permanente del Consejo de Seguridad a los asuntos incluidos en el Capítulo VII de la Carta, es decir, los asuntos que implican el uso de sanciones diplomáticas, económicas o, en último recurso, militares, contra un agresor.

Especialmente, hemos tratado de prohibir el uso del veto en conexión con el ajuste pacífico de las disputas internacionales por el Consejo de Seguridad o con cuestiones de carácter administrativo, tales como las recomendaciones del Consejo de Seguridad relativas a la admisión de nuevos Miembros en esta Organización. Nuestras propuestas no fueron adoptadas, principalmente porque en la Conferencia de San Francisco se dió a entender que la Carta no sería firmada si el poder de veto era limitado. Al mismo tiempo se nos dijo que los miembros permanentes no harían uso de su derecho de veto caprichosamente

para obstruir el funcionamiento del Consejo de Seguridad.

En el último período de sesiones de la Asamblea, hace 12 meses, Australia nuevamente hizo incluir la cuestión del veto en el programa. Señalamos que se había abusado del privilegio del veto y propusimos que la Asamblea recomendara al Consejo que el veto no fuese usado en conexión con el ajuste pacífico de las controversias en conformidad con el Capítulo VI de la Carta, que es el Capítulo que trata de las medidas de conciliación. La Asamblea finalmente adoptó una resolución un poco vaga¹ por la que se instaba a los miembros permanentes del Consejo a procurar que no le sea imposible al Consejo de Seguridad tomar decisiones rápidamente. Aun así, la intención de la Asamblea era bastante clara, y algún progreso fué realizado por el Consejo de Seguridad al elaborar el principio, o práctica de que la abstención de un miembro permanente no debía ser considerada como equivalente a un veto.

A pesar de esa resolución, formulada el año pasado, la práctica del veto ha continuado y tenemos que volver a examinar la cuestión. En el curso de este examen será necesario distinguir claramente entre el veto aplicado a las medidas coercitivas previstas en el Capítulo VII de la Carta, por una parte, y el veto aplicado a las medidas de ajuste pacífico, o de conciliación, previstas en el Capítulo VI y a las cuestiones administrativas, por otra parte.

Hago notar a los representantes aquí reunidos que, en San Francisco, y desde San Francisco, la opinión que hemos defendido ha sido directa y razonable, y ha demostrado ser una solución apropiada de este difícil problema. Hemos negado que sea legítimo aplicar el veto a los procedimientos de conciliación internacional, y el motivo de esto puede ser explicado muy fácilmente. El Capítulo VI trata simplemente de la conciliación por el Consejo de Seguridad de las partes en una controversia internacional. En nuestra opinión, conciliar es la principal función del Consejo de Seguridad. El empleo de la fuerza es un recurso extremo y esperamos que no sea jamás necesario. Pero la conciliación constituye el ejercicio cotidiano de una función que no debe ser, para nadie, ni un derecho ni un poder, sino más bien un deber del organismo a quien incumbe conciliar. De acuerdo con esta opinión, si el Consejo, o por lo menos la mayoría del Consejo, desea recomendar procedimientos de conciliación, ninguna nación debe estar facultada para poder decir: "Ustedes no pueden reconciliar a las partes en esta controversia", y sobreponerse así a la voluntad claramente expresada de la mayoría.

Cuando una situación internacional produce rozamientos no suele permanecer estacionaria. Los rozamientos aumentarán si no se hace nada y si la controversia internacional no es ajustada. La inutilidad de todo esto es notoria. A veces, cuando después de semanas o meses de esfuerzos una mayoría importante expresa su opinión en favor de una tentativa de conciliación, se aplica el veto en el Consejo de Seguridad contra la voluntad de la mayoría, lo cual sólo tiene como consecuencia prolongar la incertidumbre, aumen-

¹ Véanse *Resoluciones adoptadas por la Asamblea General durante la segunda parte de su primer período de sesiones, resolución 40 (I), pág. 58.*

tar la confusión, mantener la división e intensificar el desacuerdo.

Debo decir que es sumamente alentador y satisfactorio (y estoy seguro de ser el intérprete de muchas otras naciones aquí representadas, tanto grandes como pequeñas) ver que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha proclamado públicamente ante esta Asamblea, como lo hizo ayer el Sr. Marshall, su convicción de que el veto no debería aplicarse al ajuste pacífico de controversias previsto en el Capítulo VI. Creemos, sin embargo, que todos los hechos pertinentes son suficientemente conocidos para justificar la adopción de recomendaciones apropiadas por parte de la Asamblea. Por lo tanto, la mera designación de un comité encargado de estudiar más detenidamente el problema no sería adecuada en estas circunstancias. Hemos estudiado suficientemente este asunto. Hemos visto durante dos años el funcionamiento de la Organización. No hay aspecto de este problema que no haya sido discutido. Ha llegado el momento de hacer una revisión adecuada.

En un aspecto esencial — respecto a la cuestión de que he estado tratando, a saber, la conciliación — el problema de la revisión del derecho de veto individual en el Consejo de Seguridad está inseparablemente ligado con los poderes de esta Asamblea.

Por fortuna, en San Francisco, la competencia de la Asamblea General fué ampliada en ciertos aspectos importantes. El alcance del poder de discusión que le confirió la Carta fué extendido a cualquier asunto abarcado por la Carta, y se autorizó a la Asamblea a hacer recomendaciones a los miembros interesados, o al Consejo de Seguridad, o a ambos. No hay más que una limitación a la facultad de la Asamblea de hacer recomendaciones, y ésta se refiere a las controversias o situaciones que estén siendo discutidas por el Consejo de Seguridad.

Por lo tanto, la verdad es que respecto al ajuste pacífico de controversias, es decir, respecto a la conciliación, la competencia de la Asamblea General, aunque descrita con menos precisión que la del Consejo de Seguridad en el Capítulo VI de la Carta, es equivalente en sus aspectos esenciales a la competencia del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, de la misma manera que el Consejo de Seguridad puede investigar una controversia o una situación que pueda conducir a rozamientos internacionales o dar origen a una controversia, a fin de determinar si el mantenimiento de la seguridad internacional está en peligro, la Asamblea General posee una competencia análoga. Por supuesto, el asunto es completamente distinto si consideramos el Capítulo VII, que trata de las sanciones. En términos generales, este Capítulo se aplica a los casos en que existe una amenaza a la paz del mundo, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. En tales casos, el Consejo de Seguridad, y sólo él, puede prescribir sanciones diplomáticas, económicas o militares.

En resumen, estimamos que la competencia del Consejo de Seguridad y la de la Asamblea General en lo que respecta al ajuste pacífico de controversias y situaciones, son paralelas, y ya he intentado exponer la única limitación impuesta al pleno ejercicio de su competencia por la Asamblea. Esa limitación se refiere a los asuntos que

estén siendo discutidos por el Consejo de Seguridad.

Ayer el representante de los Estados Unidos de América señaló, con mucha fuerza, por cierto, que hay una necesidad imperiosa de que los servicios de la Asamblea puedan ser utilizados, no sólo durante los períodos de sesiones, sino de una manera continua. Esa indicación tiene particular importancia, como lo recalcó el representante de los Estados Unidos de América, en relación con las funciones de la Asamblea relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad.

Repito que hay un paralelismo entre las funciones que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General pueden ejercer respecto al ajuste pacífico de las controversias internacionales. No es que la Asamblea esté invadiendo el dominio reservado al Consejo de Seguridad; nada de eso. Cada organismo tiene su propia competencia, y nosotros tuvimos cuidado en San Francisco de reforzar las disposiciones del proyecto elaborado en Dumbarton Oaks, a fin de precisar claramente ese hecho. De ahí se deduce que, en casos en que el Consejo de Seguridad no haya podido llegar a ninguna decisión para recomendar el ajuste pacífico de una controversia internacional, o, por lo menos cuando el fracaso del Consejo de Seguridad se deba, no a la falta de la mayoría necesaria de siete miembros, sino al ejercicio del veto por uno o más miembros permanentes, sería razonable que existiera algún procedimiento por el cual la Asamblea General pudiera intentar la conciliación, en lugar del Consejo de Seguridad.

Sin embargo, para que la competencia paralela y ulterior de la Asamblea General sea ejercida de un modo efectivo, probablemente será necesario prolongar el período de sesiones de la Asamblea o celebrar un nuevo período expresamente con el fin de estudiar esas cuestiones de conciliación internacional. Por este procedimiento, la letra y el espíritu de la Carta serían observados, puesto que la situación sería entonces estudiada y resuelta por la Asamblea. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad no ha podido resolver el problema a causa de un solo veto. ¿Por qué no habría de tratar de actuar la Asamblea en los casos en que el Consejo de Seguridad no haya logrado hacerlo? Nada podría ser peor que dejar sin resolver situaciones o controversias provocadoras de fricción internacional. Además, como lo señaló el Sr. Marshall ayer, el intervalo que separa generalmente el fracaso del Consejo de Seguridad en llegar a una decisión y el siguiente período ordinario de sesiones de la Asamblea General es tan largo que debiera ser acortado, de ser ello posible.

Por lo tanto, sin conformarse necesariamente a los métodos precisos sugeridos por la propuesta de los Estados Unidos de América, Australia estima que la conciliación internacional sería favorecida y no perjudicada si se instituyeran medios para permitir a la Asamblea ejercer de manera continua y rápida su competencia en el ajuste pacífico de las situaciones y controversias internacionales en todos los casos en que, a causa del veto, el Consejo de Seguridad no haya logrado encontrar una solución a una controversia o situación internacional proveedora de fricción.

Evidentemente, se requerirán garantías precisas porque la diversidad de procedimientos para el ajuste de las controversias puede, en ciertas

circunstancias, provocar nuevas controversias. Nada podría ser peor que convocar a la Asamblea para ajustar situaciones o controversias demasiado triviales para justificar su intervención. Sin duda, tales garantías pueden ser elaboradas y lo serán.

Paso ahora a referirme a otros dos asuntos que deberán ser considerados por la Asamblea.

El caso de Grecia, que estuvo incluido en el programa del Consejo de Seguridad hasta el otro día, constituye un excelente ejemplo de la frustración, la futilidad y la positiva injusticia producida por la oposición de un solo veto en casos en que la mayoría del Consejo de Seguridad se esfuerza por aplicar un procedimiento conciliatorio en una controversia entre naciones. ¿Qué es lo que sucede? Fué nombrada una comisión de investigación. Fué nombrado un grupo subsidiario interino. Luego, en el curso de los debates en el Consejo de Seguridad, aunque no fué propuesta ninguna medida coercitiva positiva, y aunque las funciones de la comisión sugerida habían de ser puramente conciliatorias y destinadas a restablecer las relaciones diplomáticas normales entre las partes interesadas, el veto volvió a ser aplicado en contra de la voluntad claramente expresada de la mayoría de los miembros del Consejo.

En estas circunstancias, y de acuerdo con el principio que he tratado de formular, no habiendo podido el Consejo de Seguridad, a causa del recurso al veto, completar su tarea eficazmente, no es sino justo que la Asamblea misma aborde el problema. El otro día se pidió al Consejo de Seguridad que permitiera a esta Asamblea hacer una recomendación respecto a la controversia sin tener que suprimir o disolver el grupo subsidiario estacionado actualmente en Salónica. Pero una vez más esa petición fué denegada por el ejercicio del derecho de veto; en consecuencia, fué necesario sacar del programa del Consejo de Seguridad la controversia griega. Pero, habiendo sido sacada del programa del Consejo, ha sido ahora colocada en el programa de esta Asamblea. A mi juicio, esta Asamblea, haciendo uso de sus poderes, podría reinstalar al grupo actual en el ejercicio de sus funciones, o nombrar otro grupo subsidiario.

No es necesario que nos detengamos a estudiar el fondo de la controversia griega. Los representantes de Australia ya se han expresado con franqueza sobre esta cuestión en el Consejo de Seguridad. Indudablemente, habrá divergencias de opinión acerca de los méritos o deméritos de las tesis encontradas, y diferencias en la manera de señalar la importancia de ciertas conclusiones de la comisión especial. El punto que conviene subrayar, el más importante para los representantes aquí reunidos, es que, después de meses de trabajo, el resultado de los debates en el Consejo de Seguridad ha sido prácticamente anulado. En consecuencia, la Asamblea tendrá que remediar la situación e intervenir y ejercer sus poderes como lo juzgue conveniente en conformidad con su sentimiento de lo que es justo en esta importante cuestión relacionada con la seguridad internacional.

Quizá el ejemplo más notable y más sencillo (porque estoy seguro de que la discusión de estas otras cuestiones ha de crear problemas técnicos), quizá el ejemplo más sencillo del empleo del veto con un propósito enteramente extraño a las medidas coercitivas, o aun a los intereses

esenciales de cualquier nación, es el que se refiere a la admisión de nuevos Miembros en las Naciones Unidas. La Carta establece que pueden ser Miembros de las Naciones Unidas todos los Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones de la Carta y que, a juicio de la Organización, sean capaces de cumplir sus obligaciones y estén dispuestos a hacerlo. Por supuesto, eso no significa que todos los solicitantes hayan de ser admitidos automáticamente. Al contrario, el caso de cada solicitante debe ser examinado cuidadosamente para asegurarse de que las condiciones establecidas en la Carta están siendo observadas. Es evidente, según la Carta, que el órgano que debe decidir en última instancia sobre si un candidato puede o no ser elegido, no es el Consejo de Seguridad, sino la Asamblea, por recomendación del Consejo de Seguridad.

Pero ¿qué ha sucedido en la práctica? Seamos francos. El año pasado el Consejo de Seguridad se negó a recomendar la admisión de cinco candidatos, y tres de ellos fueron rechazados a causa del veto de uno de los miembros permanentes, la URSS. En la Asamblea, muchas delegaciones, incluso la de Australia, criticaron vivamente ese ejercicio injustificado del veto.

Tomemos el caso de Irlanda. Irlanda solicitó ser admitida el año pasado, y el Consejo de Seguridad se pronunció a favor de su admisión con la sola oposición de la URSS. Pero esa única oposición fué suficiente para impedir la entrada de Irlanda en la Organización. Nosotros hicimos el año pasado una recomendación sobre esta cuestión, pero el mismo procedimiento ha sido repetido este año.

Declaro con toda franqueza, y desafío a cualquiera a que me contradiga, que es imposible justificar la exclusión de Irlanda de las Naciones Unidas. Es verdad que ese país fué neutral durante la guerra, pero los que conocen los hechos recordarán que la neutralidad de Irlanda estaba dirigida contra Alemania. El pueblo irlandés es evidentemente capaz de cumplir las condiciones mencionadas en la Carta, pero a juzgar por el cariz actual de los acontecimientos, yo declaro, y lo hago con toda la fuerza de que soy capaz, que naciones que eran no hace mucho nuestros enemigos encarnizados, no países neutrales, serán admitidos en las Naciones Unidas antes que los neutrales pacíficos que manifestaron su simpatía por la causa aliada. ¿Fué excluida Irlanda porque se alegó que no era una democracia? Eso sería una falsedad manifiesta. Irlanda es evidentemente una nación democrática y debería ser admitida en las Naciones Unidas. Es casi seguro que si se procediera a una votación, la gran mayoría de los Miembros de la Organización aceptarían este parecer. De modo que, en este caso, el derecho de veto individual ha sido ejercido para obstruir la voluntad de la inmensa mayoría.

En realidad, mediante el procedimiento que he mencionado, el Consejo de Seguridad prácticamente ha usurpado los poderes de la Asamblea, arrogándose el derecho de decidir si una nación debe o no ser admitida en las Naciones Unidas. El Consejo debería limitarse a hacer recomendaciones sobre las cuestiones que sean claramente de su competencia, es decir, las cuestiones relativas a la seguridad y a la capacidad de un Estado que solicite ser admitido como Miembro para cumplir las obligaciones que, en materia de segu-

ridad, impone la Carta. En cuanto a la admisión misma, el Consejo debería dejar la decisión definitiva a esta Asamblea, donde no hay derecho de veto.

A propuesta de Australia, en el último período de sesiones la Asamblea nombró una comisión encargada de establecer un procedimiento para la admisión de nuevos Miembros que sean aceptables, tanto a juicio de la Asamblea como a juicio del Consejo de Seguridad. En gran parte debido a que la Asamblea no expresó sus opiniones con suficiente claridad o con suficiente firmeza, esa comisión sólo sugirió al Consejo cambios secundarios. En el curso del actual período de sesiones, la delegación australiana propondrá la adopción de una resolución más precisa y de mayor alcance, que será redactada teniendo en cuenta el hecho de que cinco Estados, cuyas solicitudes de admisión habían sido aprobadas por 12 de los 14 miembros y ex miembros del Consejo de Seguridad, han sido todos arbitrariamente excluidos de las Naciones Unidas por una minoría minúscula.

La Asamblea tendrá plenos poderes para expresar sus opiniones sobre la cuestión, sin menoscabar los derechos de que goza respecto a la admisión de nuevos Miembros; también tendrá autoridad para discutir, si así lo desea, los méritos particulares de cada solicitud de admisión, y podrá, asimismo, devolver al Consejo las solicitudes para que éste las examine, no en un lejano porvenir, sino en el curso del actual período de sesiones de la Asamblea.

Recomendamos este último procedimiento, a saber, que la Asamblea, en su actual período de sesiones pida al Consejo de Seguridad se sirva examinar nuevamente las recomendaciones relativas a las solicitudes de admisión de aquellos Estados que, en opinión de la Asamblea, tienen claramente derecho a formar parte de las Naciones Unidas.

Voy a referirme a otro tema que no figura en el programa sino en forma indirecta: la Comisión de Energía Atómica. Esta Comisión ha sometido dos informes al Consejo de Seguridad. Si las recomendaciones de esta Comisión fueran puestas en efecto, constituirían un acontecimiento en la historia de la cooperación internacional. Esos informes conciernen directamente a la Asamblea, que instituyó la Comisión de Energía Atómica en enero de 1946¹. Creo que es un hecho significativo que los principios y la mayor parte de los detalles del plan de control elaborado por la Comisión de Energía Atómica han sido ya aprobados por 13 de los 15 miembros y ex miembros de la Comisión de Energía Atómica. Análisis detallados han sido hechos por los especialistas que forman parte de la Comisión, que demuestran sin duda alguna que el mejor modo de impedir la producción de armas atómicas consiste en instituir un organismo internacional dotado de amplios poderes que le permitan poseer las instalaciones peligrosas donde se utiliza la energía atómica y controlar todas las otras fases de la producción de energía atómica por medio de un sistema de inspecciones y de autorizaciones.

Por el momento, sin embargo, la URSS no ha juzgado oportuno aceptar las propuestas de la

mayoría de los miembros de la Comisión de la Energía Atómica.

Sin embargo, aunque las recomendaciones de la Comisión no han sido aceptadas todavía, creo que es justo decir que se han dado dos pasos importantes durante el año pasado hacia el acuerdo a que deberá llegarse finalmente. Ahora hay un acuerdo unánime respecto a que las instalaciones relacionadas con la energía atómica, desde la extracción de las materias primas hasta la fase última de la producción de energía, deben ser sometidas a una inspección efectuada por un personal internacional. También hay acuerdo en que ningún poder de veto deberá estorbar las operaciones cotidianas de verificación del órgano de control internacional. Aunque la mera inspección periódica es insuficiente para garantizar efectivamente que una convención relativa al control de la energía atómica no será violada o eludida mediante subterfugios, la aceptación de esos dos puntos constituye un progreso positivo respecto a la posición existente el año pasado. Además, el hecho de prohibir el uso del veto en las operaciones cotidianas de control contribuye mucho a reforzar a la tesis de la mayoría de que el violador de una convención no debe poder ser protegido por ningún derecho de carácter jurídico.

Deseo especialmente felicitar al Gobierno de los Estados Unidos de América por haber puesto a la disposición de otras naciones isótopos radioactivos. Esta acción, que fué sugerida por el Gobierno australiano en las sesiones de apertura de la Comisión de Energía Atómica en 1946, debe servir para crear mayor confianza entre las naciones. Esta acción demuestra en forma evidente la sincera intención del pueblo y del Gobierno de los Estados Unidos de América de coadyuvar a la investigación científica y a la terapéutica médica y, por ese medio, obtener de estos nuevos y grandes descubrimientos resultados beneficiosos para toda la humanidad.

A pesar de la importancia de las propuestas relativas al desarme, y obligados como estamos por la Carta a considerarlas y estudiarlas todas, tienden a apartar la atención de los pueblos del mundo de los dos objetivos principales de esta Organización.

El primero de los dos objetivos es la prevención de la guerra y la substitución de la fuerza y la violencia con los métodos de conciliación y arbitraje. Debemos esforzarnos en primer lugar por alcanzar ese objetivo, antes de determinar las reglas y las condiciones, porque a eso se reduce la cuestión, que regirían las guerras en el porvenir. No me agrada que nos pusiéramos a estudiar ahora una serie de reglas, cuya observancia, como la de las del Marqués de Queensbury para el boxeo, fuesen obligatorias en la próxima guerra. Debemos comprender que las invenciones de la ciencia moderna contienen potencialmente males y calamidades tan enormes y capaces de propagarse tan rápidamente, que la guerra, aunque sea sometida a condiciones y restricciones en virtud de reglas y reglamentos, que pueden ser o no ser observados, constituye una amenaza perpetua de exterminación para la raza humana. El principal enemigo es la guerra misma.

El segundo objetivo de las Naciones Unidas, al cual se refieren las importantes disposiciones de la Carta relativas a los aspectos económicos y sociales de nuestras actividades, es el siguiente:

¹ Véanse las *Resoluciones adoptadas por la Asamblea General* durante la primera parte de su primer período de sesiones, resolución 1 (I), pág. 9.

la mera prevención de la guerra no es suficiente, la seguridad económica y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los pueblos y de todas las razas deben también ser considerados como objetivos.

Eso nos lleva a considerar la tarea económica de las Naciones Unidas. Hoy existe un desequilibrio económico fundamental en todo el mundo. Esta situación exige una solución humanitaria generosa en su concepción y generosa en su aplicación. En realidad, somos solidarios los unos de los otros, y si la miseria y la depresión económicas afligen a una parte del mundo, se extenderán inevitablemente a las demás.

¿Qué contribución han hecho las Naciones Unidas a esa solución? Temo que no pueda decirse que el Consejo Económico y Social haya comenzado a atacar el fondo de los problemas económicos y sociales. Es realmente extraordinario que el Consejo todavía no haya emprendido, o hecho emprender, un estudio general de la actual situación económica mundial. El Consejo se ha ocupado detenidamente, y con éxito, en cuestiones de procedimiento y organización, pero queda aún por determinar el orden de prioridad de las cuestiones urgentes, a fin de que el Consejo pueda tomar la iniciativa de ocuparse en los principales problemas económicos del mundo. Tomemos un ejemplo bien convincente: el único resultado de toda la atención prestada por el Consejo a la crisis económica reinante hoy en Europa, ha sido la creación de un organismo, la Comisión Económica para Europa, y la principal realización de ese organismo ha sido absorber a otros organismos.

En San Francisco, nosotros decidimos incluir en la Carta disposiciones relativas al empleo total y a la elevación de los niveles de vida. Más tarde, incluimos los mismos principios en las constituciones de los organismos especializados interesados. El Consejo Económico y Social ha estado funcionando desde hace dos años. La Asamblea debería interesarse en saber si este organismo se está ocupando en aplicar los compromisos resultantes de la Carta, o si esos compromisos no han de existir más que en el papel.

En su última sesión, el Consejo reconoció que la Comisión de Asuntos Económicos y Empleo había fracasado en su labor, y rechazó las resoluciones insuficientes preparadas por ella. Pero el Consejo se mostró incapaz de atenuar por medio de su propia iniciativa el fracaso de su organismo subalterno. Creemos que debería asignarse al Departamento de Asuntos Económicos de la Secretaría, más claramente, la responsabilidad de suministrar al Consejo y a las Comisiones, como bases de sus recomendaciones, una exposición de los hechos y estudios económicos. Sea como fuere, es a la Asamblea a quien incumbe en último término la responsabilidad de examinar el conjunto del mecanismo económico de las Naciones Unidas y de los organismos especializados.

Los acuerdos entre las Naciones Unidas y los organismos especializados entraron en vigor hace un año por resolución de la Asamblea General, pero los informes de esos organismos no han sido sometidos a nuestra consideración. Comprendo muy bien que el Consejo desee examinarlos todos en conjunto, pero eso no será posible, por lo menos antes del año próximo, y el Gobierno australiano está preocupado por el hecho de que el Consejo no se ha mostrado más diligente en el cum-

plimiento de su responsabilidad de equilibrar los programas de los distintos organismos especializados.

La Organización para la Agricultura y la Alimentación, que es tan importante para todos nuestros países, ha señalado repetidas veces que el aumento del rendimiento agrícola debe ser simultáneo al desarrollo de la industria a fin de poder usar la mano de obra agrícola así liberada y fabricar productos industriales canjeables por un volumen mayor de productos agrícolas. Ese es sólo un ejemplo de los problemas prácticos importantes que se presentan en el campo del desarrollo económico. El problema de la coordinación de los programas de los organismos especializados, no puede ser resuelto por los organismos especializados mismos y requiere el examen cuidadoso del Consejo y, en último término, de la Asamblea.

En lo que se refiere a la coordinación efectiva de las distintas secretarías internacionales, creo que la Asamblea debe preocuparse por el hecho de que el Comité de Coordinación, formado por el Secretario General y los Directores Generales de los organismos especializados, no ha podido reunirse más que una sola vez. Cada vez que tienda a producirse una rivalidad entre esos organismos, las normas y la cooperación deben proceder de arriba.

Hemos señalado estas debilidades sólo a fin de ayudar a la Asamblea y al Consejo a buscar remedios. Después de todo, esta es la tribuna pública del mundo y este es el lugar para exponer nuestro puntos de vista y estudiar si es posible mejorar la situación. Tenemos la esperanza de que la obra futura de las Naciones Unidas será fortalecida por los siguientes factores:

1) Menos división política o ideológica en el Consejo Económico y Social;

2) Mejor representación en el Consejo, mediante la reunión efectiva de las personas responsables de la política económica en cada país. De este modo, las recomendaciones del Consejo tenderán también a convertirse en las decisiones de sus Estados componentes;

3) Informes y análisis preparados por la Secretaría sobre los hechos comprobados respecto a las condiciones y tendencias económicas mundiales.

Acabo de referirme francamente a las grandes dificultades a que tenemos que hacer frente. Pero, por supuesto, la situación tiene otro aspecto.

Después de todo, las Naciones Unidas están en su infancia. La Sociedad de las Naciones duró casi una generación y, finalmente, fracasó. ¿Por qué? Menos por dificultades de organización que por el hecho de que durante el desarrollo de las vastas y poderosas fuerzas fascistas en los primeros años de la cuarta década de este siglo, los Gobiernos responsables de la dirección de la Sociedad de las Naciones no la apoyaron con toda la fuerza de su autoridad. No fué la Sociedad de las Naciones la que traicionó a los pueblos y Gobiernos del mundo, sino algunos de los Gobiernos del mundo quienes traicionaron a la Sociedad de las Naciones.

Aun en los últimos 12 meses, se han obtenido éxitos importantes en materia de cooperación internacional dentro y fuera de las Naciones Unidas. Suele reconocerse que el Consejo de Segu-

ridad intervino oportuna y prudentemente en la situación de Indonesia a fin de substituir la conciliación al empleo de la fuerza. Estoy seguro de que la comisión especial de conciliación del Consejo de Seguridad, que será constituida próximamente, contribuirá en forma importante al bienestar de las poblaciones holandesas e indonesias en el sudeste de Asia.

El régimen de administración fiduciaria, con sus objetivos idealistas y al mismo tiempo prácticos, ha sido puesto en práctica.

La Organización Internacional de Comercio, a pesar de todas las complicaciones y dificultades, está progresando satisfactoriamente.

Fuera de la Organización de las Naciones Unidas, pero en un plano paralelo, está en vías de creación una comisión consultiva para la región del Pacífico meridional; su campo de acción se extenderá a los seis países que administran territorios en la región del Pacífico situada al sur del ecuador.

En el Hemisferio Occidental, la negociación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca muestra que, dentro de la Carta, los acuerdos regionales de carácter defensivo, no sólo son permitidos, sino también fomentados. A mi juicio, los que tuvieron la iniciativa de este acuerdo merecen ser felicitados.

En el Lejano Oriente, el ajuste de la paz con el Japón está más cerca. La Comisión para el Lejano Oriente, establecida en Wáshington, es un ejemplo notable de cooperación entre los 11 países que combatieron en la guerra del Pacífico.

La Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente ha sido creada. Para el desarrollo de los recursos económicos de estas vastas regiones, donde quizá habrá de decidirse el porvenir del mundo, es posible que esta Comisión constituya un instrumento eficaz de colaboración intergubernamental.

Los primeros envíos de alimentos destinados al Fondo Internacional de Socorro a la Infancia están en camino.

Varios países han respondido generosamente a las necesidades de socorro después de la cesación de las actividades de la UNRRA.

La Organización Internacional de Refugiados ha empezado a funcionar y por fin se están realizando progresos considerables en la reducción del número de personas desalojadas, víctimas de esa gran tragedia, de la cual Hitler fué responsable.

La reciente ratificación de cinco tratados de paz con países europeos tiende a eliminar de gran parte de Europa la extrema incertidumbre y la desorganización que la amenazaban.

Estos son sólo unos pocos ejemplos, pero creo que son suficientes para probar que nosotros, los representantes, si es que efectivamente representamos a nuestros pueblos en esta Asamblea y contamos con su apoyo y su autoridad, podemos y debemos resolvernos a recurrir a este gran instrumento de nuestra Organización, a esta Asamblea General, con valor y con buena voluntad para todos. Procediendo así, podremos contribuir, no sólo a darle paz a un mundo atormentado, sino a mantener la paz sobre una base de justicia y honradez, en conformidad con los propósitos y principios de nuestra gran Carta.

Durante el discurso del Sr. Evatt, el Sr. Aranha abandona la Presidencia y es reemplazado por el Sr. Torres Bodet (México).

El PRESIDENTE (*traducido del francés*): Tiene la palabra el representante de China.

Sr. WANG SHIH-CHIEH (China) (*traducido de la versión francesa del texto chino*): Hemos venido de todas partes del mundo y estamos reunidos aquí, en el segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, para discutir y resolver un gran número de cuestiones difíciles. Estas sesiones tienen una importancia especial por el hecho de que las Naciones Unidas han llegado a un punto en que su desarrollo futuro y hasta su existencia misma están comprometidos.

En todo el mundo los hombres están profundamente alarmados por la situación política y económica actual. Han perdido un poco las esperanzas e ilusiones que las Naciones Unidas les habían inspirado y se preguntan si la Organización podría hacerle frente a una crisis internacional grave.

Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que las Naciones Unidas no son un Estado soberano, de que no es lo que se llama un super Estado. Su poder no puede ser mayor que el que le den sus Miembros. Las imperfecciones de las Naciones Unidas son en realidad las imperfecciones de sus Miembros.

Ya están incluidas en nuestro programa numerosas cuestiones para este período de sesiones de la Asamblea. Algunas tienen carácter de urgencia, por ejemplo, la cuestión de Palestina y la cuestión de Grecia. Por otra parte, hay cuestiones importantes que aun no han sido sometidas a nuestra Organización, pero que en adelante, exigirán la atención de la Asamblea, como, por ejemplo, la cuestión de la independencia de Corea, planteada ayer por el Sr. Marshall.

Si, con nuestra prudencia colectiva y nuestra buena voluntad común, logramos resolverlas de una manera justa y satisfactoria, la autoridad de las Naciones Unidas se verá inmediatamente reforzada, y en todos los países, los hombres concebirán una nueva esperanza y se sentirán animados a redoblar sus esfuerzos para sacar al mundo de la confusión actual. Tal es, en mi opinión, la noble misión de esta Asamblea; tal es, también, su más ardua tarea.

Los informes cuidadosamente preparados por los distintos órganos de las Naciones Unidas, nos dan una idea clara de las actividades de la Organización y de los resultados obtenidos; y del mismo modo nos permiten comprender la naturaleza de las cuestiones que esta Asamblea tendrá que resolver.

El Consejo de Seguridad, al cual incumbe la inmensa responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales, ha hecho grandes esfuerzos en este campo, pero no siempre ha obtenido grandes resultados. Los fracasos del Consejo de Seguridad han sido atribuidos generalmente, por sus amigos y por sus críticos, a la existencia del derecho de veto.

A juicio del Gobierno chino, lo que se llama el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es más un deber especial que un derecho especial. Este derecho de veto impone a los miembros permanentes una responsabilidad extraordinaria, ya

que están obligados, cada vez que se trata de una cuestión importante, a hacer todo lo posible para lograr la unanimidad. En el curso de los dos últimos años, China, aunque posee el derecho de veto, no lo ha usado jamás en el Consejo de Seguridad. Por otra parte, el Gobierno chino, durante el último período ordinario de sesiones de la Asamblea General, hizo ciertas propuestas concretas destinadas a impedir el ejercicio excesivo del derecho de veto. Nosotros tenemos confianza en la prudencia de la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad y estimamos que, salvo en el caso de una cuestión de importancia vital, ningún miembro del Consejo debe, con un voto negativo, paralizar la acción del Consejo de Seguridad. Nuestra Asamblea debería hacer todos los esfuerzos por llegar a un acuerdo sobre la correcta aplicación de las disposiciones de la Carta relativas al derecho de veto.

A decir verdad, el derecho de veto, o más bien el abuso de ese derecho, no es el único obstáculo que encuentra el Consejo de Seguridad. Aunque nosotros enmendáramos la Carta de las Naciones Unidas a fin de modificar o abolir el derecho de veto, todavía quedaría un peligro fundamental para la Organización: la tendencia del mundo a dividirse en grupos de naciones, grupos que consideran sus divergencias de opiniones como inconciliables.

No se puede negar que, actualmente, el mundo tiende a dividirse en grupos contrarios, en lugar de desenvolverse en una unión, en una comunidad de todas las naciones, en ese "mundo único" que concibieron los autores de la Carta de San Francisco y en cuyo advenimiento tuvieron fervorosa fe. Si no se hace nada por poner fin a esta tendencia, las Naciones Unidas descenderán inevitablemente al nivel de una simple tribuna pública y perderán toda autoridad. Las Naciones Unidas sólo pueden servir eficazmente como un instrumento para mantener la paz si sus Miembros están dispuestos a subordinar sus intereses nacionales particulares a los intereses, más nobles y más vastos, de la humanidad.

Hubo una época en que el individuo no conocía más ley que la suya propia. Hubo una época en que los Estados eran absolutamente soberanos. Pero hoy la interdependencia de los hombres y la de las naciones es tal, que si no antepone el interés de la raza humana a los intereses particulares, nos hundiremos y pereceremos juntos.

Hoy, tanto dentro de las Naciones Unidas como fuera de ella, presenciamos en todas partes las manifestaciones clamorosas del orgullo y de los prejuicios nacionalistas, y la voz del internacionalismo continúa siendo muy débil. Si los Miembros de la Organización no logran anteponer el internacionalismo a los nacionalismos, será imposible preservar la paz del mundo.

Examinemos ahora la actuación del Consejo Económico y Social. En el mundo entero, los pueblos aspiran al progreso económico y a la evolución social. China se complace en ver que las Naciones Unidas han instituido diversos organismos internacionales encargados de buscar soluciones a las cuestiones económicas y sociales.

Durante el año pasado, el Consejo Económico y Social prácticamente completó la estructura de su organización. Basta con dar un vistazo a la lista de sus comisiones: Comisión de Derechos del Hombre, Comisión de Asuntos Económicos y

Empleo, Comisión de Asuntos Sociales, Comisión de Transportes y Comunicaciones, Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, Comisión Fiscal, Comisión de Estadística, Comisión de Población, Comisión de Estupefacientes, etc., para apreciar la extensión de su campo de acción y la amplitud de sus programas.

Ahora, cuando todas estas Comisiones y Subcomisiones han sido creadas, es necesario pensar en la coordinación de sus actividades. En este sentido, la delegación china espera que el Consejo Económico y Social tendrá en cuenta nuestras sugerencias. A juicio nuestro, si el mal de que padece el Consejo de Seguridad es el conflicto entre sus miembros, el mal que aqueja al Consejo Económico y Social, es la confusión. Por eso, desearíamos que el Consejo Económico y Social adquiriera una conciencia cada vez más clara de los fines y llegara a una definición cada vez más precisa de los métodos en lo que concierne a la actuación de cada uno de sus órganos subsidiarios. Tal debe ser, a nuestro juicio, la tarea más importante del Consejo Económico y Social para el año próximo.

Agregaré algunas palabras sobre el Consejo de Administración Fiduciaria. El régimen internacional de administración fiduciaria ha comenzado, a funcionar, y el Consejo de Administración Fiduciaria ha inaugurado sus trabajos. El Gobierno chino acoge este acontecimiento con satisfacción. A juicio de la delegación china, el régimen de administración fiduciaria señala el comienzo de la edificación de un mundo enteramente libre. Según la Carta de las Naciones Unidas, el régimen internacional de administración fiduciaria debe aplicarse a tres clases de territorios. Ahora bien, hasta ahora el régimen internacional de administración fiduciaria no se extiende a todos los territorios bajo mandato de la Sociedad de las Naciones que aun no han logrado su independencia. Ninguno de los territorios separados pertenecientes a los Estados ex enemigos ha sido colocado bajo el régimen de administración fiduciaria, y ningún "territorio no autónomo" ha sido colocado voluntariamente bajo ese régimen. Por lo tanto, aunque el régimen de administración fiduciaria ha sido inaugurado, aun se necesita una larga serie de esfuerzos para darle la extensión y la eficacia previstas por la Carta.

Nuestra tarea es ardua, nuestra responsabilidad es enorme. El actual período de sesiones de la Asamblea General no logrará un éxito completo si no tenemos todos la misma determinación y si no afirmamos cada vez más nuestra voluntad de colaboración. Como representante de un país que ha conocido todos los horrores de la guerra cuyas heridas dos años después de la victoria, aun no han sido restañadas, desearía transmitirles mi convicción de que las Naciones Unidas, que es el guardián de la paz, no deben y no pueden fracasar.

El PRESIDENTE (*traducido del francés*): Tiene la palabra el representante de Filipinas.

General RÓMULO (Filipinas) (*traducido del inglés*): Tengo el honor de presentar a esta Asamblea los saludos y cordiales felicitaciones de Su Excelencia, el General Manuel Roxas, Presidente de Filipinas.

En este período de sesiones de la Asamblea General, tenemos que estudiar una multitud de problemas graves. No creo que sea necesario

instilar en nuestro ánimo la trascendencia de la tarea a que nos vamos a consagrar. Hemos llegado a un momento decisivo en la vida de las Naciones Unidas y en la historia de la humanidad. La tarea que nos espera constituye a la vez un desafío y una oportunidad, y de la manera en que esta Asamblea la realice habrá de depender el éxito de nuestros esfuerzos por salvar a la humanidad de la crisis que amenaza hundirla, para conducirla a un destino mejor.

Frente a la inseguridad y la violencia que afligen hoy a los habitantes de tantas regiones del mundo, sería difícil disimular la gravedad de los hechos y sumamente imprudente hacerse ilusiones. En el mundo entero, los hombres esperan con ansiedad el bálsamo de la paz, esa paz que aun no ha sido preparada. La paz, que normalmente debió haber sido el fruto de nuestra victoria común, aun no la hemos alcanzado. Lo que los hombres sienten hoy es una mezcla de impaciencia y de temor, impaciencia por la lentitud del progreso realizado para promover la confianza y la cooperación internacionales, y temor por el desastre final que habría de acompañar el fracaso de nuestros esfuerzos actuales.

Hace un año o dos, era mucho más fácil atribuir poca importancia a la desorganización social y económica de muchos países y a los conflictos y rivalidades políticas entre los diversos Estados, interpretando esas condiciones como consecuencias inevitables de la guerra. Hoy ya no podemos seguir consolándonos con esa actitud. Hoy es evidente que tenemos que hacer frente a una situación que no es simplemente la desorganización que suele seguir a la guerra, sino una confusión calculada que, en el pasado, por lo general ha conducido a la guerra.

Por fortuna, la situación no deja de presentar aspectos alentadores, porque el largo y recargado programa del actual período de sesiones refleja fielmente la ansiedad que a todos produce el empeoramiento de las condiciones sociales, económicas y políticas de la humanidad, el deseo general de apresurar el mejoramiento de esas condiciones y, lo que es aún más significativo, la fe inquebrantable de la humanidad en las Naciones Unidas como instrumento para efectuar tal mejoramiento.

Sería imposible hablar de la amenaza de fracaso que se cierne sobre la Organización sin referirse al derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. No es una exageración afirmar que toda la estructura de las Naciones Unidas acabará al fin por desmoronarse y hundirse bajo los martillazos repetidos del veto. Podemos hablar así, aun aquellos de nosotros que hemos estado combatiendo el veto desde San Francisco, sin acaloramiento ni pasión. Con mucha calma y deliberación afirmamos que el mundo tiene que elegir entre las Naciones Unidas y el derecho de veto en su forma actual. No podemos tener ambas cosas. Es posible que pronto no tengamos ni la una ni la otra.

Dejemos que los hechos hablen por sí mismos. En el espacio de dos años, el derecho de veto ha sido ejercido 22 veces, 20 de ellas por un solo miembro permanente del Consejo de Seguridad. Crisis tras crisis, el Consejo de Seguridad se ha visto prácticamente paralizado. En la cuestión de Grecia, en los incidentes del Canal de Corfú, en las propuestas para el control de la energía

atómica, en el conflicto indonesioholandés, hasta en la cuestión de la admisión de nuevos Miembros en las Naciones Unidas, algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad han estimado conveniente ejercer su derecho de veto para impedir decisiones destinadas a promover la cooperación internacional para mantener la paz.

Al oponerse al principio del derecho de veto, mi Gobierno no desea de ninguna manera poner en entredicho la bien merecida preponderancia de los cinco miembros permanentes en los Consejos de las Naciones Unidas. Pero mi país considera que ninguno de estos cinco Estados tiene el derecho de condenar a un órgano de las Naciones Unidas tan importante como lo es el Consejo de Seguridad, a una condición de parálisis permanente.

Nuestra principal objeción al derecho de veto no es que haya sido usado con demasiada frecuencia por uno de los miembros permanentes. Es más bien que cualquiera de los cinco miembros permanentes puede esgrimirlo, como hemos visto que lo ha hecho uno de ellos, cada vez que, al hacerlo, le parezca adelantar lo que considera ser sus intereses nacionales. De este ejemplo puede verse con claridad que el derecho de veto no favorece la unanimidad; más bien estimula la adopción de actitudes rígidas y de posiciones inalterables, y puede crear una situación en que alternen la amenaza y la provocación.

El principio de la unanimidad no puede establecerse por decreto. Sólo puede nacer de una disciplina interna suficientemente fuerte para que los miembros permanentes, renunciando a actuar bajo el impulso de intereses brutales y egoístas, sólo tomen en consideración la posibilidad de obtener una mayoría importante o la seguridad de ser derrotados. Tal disciplina no puede nacer mientras cada uno de los miembros permanentes sepa que tiene siempre a la mano la invencible arma que es el derecho de veto. Es menester modificar el derecho de veto de manera que sólo pueda ser ejercido en ocasiones extraordinarias y justificables, a fin de facilitar las transacciones y los ajustes que constituyen la disciplina de que acabo de hablar.

De acuerdo con esta opinión, mi Gobierno apoyará cualquier propuesta razonable encaminada a limitar o a reglamentar el ejercicio del veto, a ser posible por medio de medidas voluntariamente aceptadas por los miembros permanentes, o, en caso necesario, por medio de enmiendas al Artículo 27 de la Carta.

Se ha dicho que la oposición al derecho de veto es instigada por las pequeñas Potencias y que es sólo a ellas a quienes puede aprovechar. Aunque haya podido ser así al principio, en San Francisco y más tarde, el año pasado, en Nueva York, ya no lo es. Los propios miembros permanentes ya no están unánimes acerca del principio de la unanimidad. Oímos con satisfacción ayer al Secretario de Estado de los Estados Unidos de América afirmar ante la Asamblea que los Estados Unidos estarían dispuestos a estudiar medidas destinadas a liberalizar el procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad, en particular por medio de la eliminación del requisito de la unanimidad respecto a los asuntos previstos en el Capítulo VI de la Carta, y de otros asuntos tales como las solicitudes de admisión. Estas son propuestas concretas que merecen cuidadosa

consideración por parte de todas nuestras delegaciones. Volvamos a examinar el asunto en todos sus aspectos. Será menester que a su vez los otros miembros permanentes presenten sus propias propuestas y muestren así al mundo su deseo de contribuir a remediar esta difícil situación.

Desde hace algunos meses vienen provocando una creciente inquietud ciertos planes y ciertas propuestas que, en efecto, revelan una tendencia a prescindir de las Naciones Unidas. Las personas dotadas de sentido común tienen razón en deplorar tal tendencia, pero ninguno de nosotros puede con justicia condenarla si nosotros mismos, por medio de nuestras deliberadas tácticas obstruccionistas, por medio del ejercicio del veto o por cualquier otro procedimiento, estamos determinados a bloquear cualquier medida razonable urgentemente requerida por tal o cual problema. Después de todo, la inactividad nada resuelve. El problema continúa, y si hay otra manera de resolverlo que no sea por conducto de las Naciones Unidas, se recurrirá a tales métodos, sin que el derecho al veto pueda estorbarlo.

El nudo del problema es, pues, capacitar al Consejo de Seguridad para que realice sus vitales funciones, en conformidad con la Carta, mediante métodos de eficacia práctica que requieren la modificación del ejercicio del derecho de veto; o bien, conservando el derecho de veto en su forma presente, condenar al Consejo de Seguridad a ser completamente inútil y hacer virtualmente necesario el recurso a subterfugios y evasiones que, indudablemente, acabarán por arruinar la propia Organización de las Naciones Unidas.

La imposibilidad en que el Consejo de Seguridad se ha encontrado para actuar en forma decisiva en varios asuntos importantes ha aumentado proporcionalmente la carga de responsabilidades de la Asamblea, así como la importancia de las tareas que ha de realizar. La Asamblea es fuerte porque obedece a la opinión mundial y no puede ser paralizada por el ejercicio del veto. Pero, por otra parte, disminuye mucho su eficacia el hecho de que sus decisiones no son obligatorias como las del Consejo de Seguridad y que, a diferencia del Consejo, no está reunida continuamente.

La delegación de los Estados Unidos de América propuso, para remediar el segundo de estos defectos, el establecimiento de una comisión interina de paz y seguridad. La delegación de Filipinas apoya calurosamente esta propuesta, no sólo por ser fácilmente realizable dentro de la Carta, sino también porque facilitaría el trabajo de la Asamblea al reducir la acumulación de nuevos asuntos en cada período de sesiones.

Aun cuando así se haga, quedará por resolver el problema de dar más fuerza a las decisiones y recomendaciones de la Asamblea General. Pienso en decisiones tales como la que se tomó respecto a la reclamación presentada por la India contra la Unión Sudafricana, en la que pedía a las Potencias metropolitanas organizar conferencias de representantes de los pueblos no autónomos, y otras que no han sido observadas con la fidelidad que todos tenemos el derecho de esperar. Los que critican el abuso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad deberían detenerse a considerar que estorbar toda clase de decisiones no es más condenable que eludir las decisiones tomadas o ponerles obstáculos. Indudablemente, desde

el punto de vista moral, esta última actitud es la más condenable de las dos. Por lo tanto, la delegación de Filipinas exhorta a los miembros de esta Asamblea a estudiar, si no en este período de sesiones, en un porvenir cercano, las medidas que convendría tomar respecto a los Estados Miembros que no cumplan, o rehusen cumplir, los mandatos de la Asamblea General.

Después de largos preparativos y prolongadas demoras, fué creada este año la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente. Los estudios preliminares de los problemas económicos del Asia han sido terminados y otros estudios están en proyecto. Nos alegramos de que esta Comisión haya sido creada y nos congratulamos por el trabajo preparatorio que ha sido realizado, pero al mismo tiempo nos apena la experiencia de la Comisión Económica para Europa. El trabajo de esa Comisión estaba mucho más avanzado que el de la Comisión para Asia y el Lejano Oriente. En efecto, estaba listo para pasar de los planes a la ejecución. Desgraciadamente, la Comisión para Europa se encuentra actualmente en una especie de letargo. En todos los asuntos prácticos, sus tareas han sido asumidas por otro organismo que no pertenece a las Naciones Unidas.

¿Cuál será el destino de la Comisión para Asia? Quizá lo sabremos a fines de año cuando la Comisión se reúna en Baguio, en las Filipinas. Mientras tanto, ha acaecido otro suceso de importancia en este campo. Se ha creado una Comisión Económica para América Latina. No podemos sino expresar la esperanza de que tanto allí, como en Asia y en el Lejano Oriente, sea posible, en el campo económico, elaborar un sistema de cooperación y de asistencia entre los pueblos, enteramente dentro de la estructura de las Naciones Unidas.

La delegación de Filipinas se congratula también por el establecimiento del régimen de administración fiduciaria y del Consejo de Administración Fiduciaria y por el evidente deseo de las Potencias administradoras de observar las obligaciones contraídas por ellas en virtud de la Carta y de los términos de sus respectivos acuerdos con las Naciones Unidas. Debe deplorarse, sin embargo, que a consecuencia de la misma actitud que ha conducido a hacer beneficiar a los territorios bajo administración fiduciaria de disposiciones más liberales que a los territorios no autónomos, siga manifestándose apatía cuando se trata de promover el progreso político de los territorios no autónomos, tarea que la Carta define, sin embargo, como una "misión sagrada". Quisiera recomendar a todos los Miembros de la Asamblea General la lectura atenta de las actas de las sesiones de la Comisión Especial tan hábilmente dirigida por mi buen amigo y distinguido colega de Nueva Zelandia, Sir Carl Berendsen, y que fué creada por la Asamblea General el año pasado a fin de que examinara el resumen hecho por el Secretario General de los informes presentados por las Potencias metropolitanas en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta.

La lectura de esas actas da mucho que pensar. Las actas demuestran claramente el poco interés ya mencionado. Revelan el error a la vez patético y peligroso, cometido, en este siglo tan adelantado, por algunas Potencias que rehusan con insistencia reconocer el derecho de las poblaciones no autónomas a la libertad y a la independencia.

Pero, por fortuna, hay cierto número de puntos brillantes en el sombrío cuadro político de las regiones no autónomas. Han sido creados los Dominios de la India y del Pakistán. Nos ha sido presentada una propuesta encaminada a hacer cesar el mandato sobre Palestina y a reconocer su independencia. Se piensa conceder más autonomía a Birmania y a Ceilán. En fin, ayer no más, en esta misma tribuna, oímos a los Estados Unidos de América comprometerse solemnemente a presentar a la Asamblea General el problema de Corea en el curso de este periodo de sesiones y a ofrecer sugerencias respecto a los medios de conceder a ese país, lo más pronto posible, la independencia.

Estas pruebas concretas de la marcha irresistible de las ideas de libertad nos confortan; rendimos homenaje tanto a los Estados Unidos de América como al Reino Unido por haber reconocido que los mismos principios que han contribuido a su propia grandeza y les han valido el respeto del mundo, no perderán nada de su valor por el hecho de ser aplicados, fuera de sus fronteras, a otros pueblos.

La semilla de la libertad, privada de los beneficios del sol y de la lluvia durante décadas o siglos, no crecerá, pero no morirá. Sea en Asia o en Africa, germinará, brotará con una vitalidad tal que, más tarde, ni la explotación económica, ni el control político, ni el dominio militar la podrán reprimir.

Los ejemplos de renunciación de poderes por ciertos Estados han sido, en los últimos años, demasiado numerosos para no haber dejado una impresión indeleble en el espíritu de las poblaciones que aun no han obtenido su libertad. Queda por ver si el espíritu de nuestra Carta y el ejemplo inspirador dado por algunas Potencias metropolitanas permitirán liquidar pacíficamente el anticuado sistema colonial, o si la ciega determinación de preservar ese sistema ocasionará, como desgraciadamente ha ocasionado en algunas regiones, el recurso a la violencia y la efusión de sangre. Existe un método pacífico, que los Estados Unidos de América han aplicado en Filipinas, y que otras Potencias metropolitanas han empleado en otros países; ese método podría y debería ser aplicado en todas partes.

Al empezar los trabajos de este período de sesiones, no puede menos de volver a impresionarnos la abundancia y la gravedad de los problemas sometidos a la Asamblea General. Este hecho puede provocar en nosotros un sentimiento de impotencia o puede llevarnos a la determinación de hacer todo lo que razonablemente pueda hacerse con los medios de que disponemos. Porque nuestro programa prueba del modo más elocuente el desesperado deseo de todas las naciones de progresar en el orden social y de sobrevivir en el orden económico en un mundo en que reinen la libertad y la paz.

Esta tendencia de someter todos los males de la humanidad a las Naciones Unidas, ha sido considerada por algunos como una práctica peligrosa e ilusoria. Se nos ha recordado que las Naciones Unidas no están equipadas para curar todas las enfermedades del mundo. Nosotros, los

filipinos, no compartimos ese punto de vista y la estimamos, por el contrario, como una tendencia muy saludable. Porque sabemos que el peligro no está en la tendencia misma, sino más bien en dos actitudes: primero, en negarse a dar fuerza y autoridad a las Naciones Unidas y a sus órganos para que puedan realizar las tareas que les incumben en virtud de la Carta; y, en segundo lugar, en no movilizar a las Naciones Unidas para la realización de las tareas que la Carta las autoriza a realizar y para las cuales facilita los medios.

El trabajo es difícil y largo, pero no nos arredramos. No debemos dejarnos arredrar. Con paciencia y buena voluntad, con fe en el propósito común que nos ha reunido y con la firme determinación de agotar todas las posibilidades hasta llegar a un acuerdo sobre las cuestiones sometidas a nosotros, nos sobrepondremos a las angustias del momento presente y libraremos al mundo del temor de un desastre universal que ahora lo atormenta.

El PRESIDENTE (*traducido del francés*): Tiene la palabra el representante del Canadá.

Sr. SAINT LAURENT (Canadá) (*traducido del inglés*): Estimo que la declaración de la delegación canadiense al iniciarse el debate general de la presente Asamblea, debe dar cuenta de la manera en que el Canadá ha cumplido sus deberes como Miembro de las Naciones Unidas y manifestar si, a su juicio, esta Organización está realizando los altos fines y nobles ideales que inspiraron su creación.

Respecto al primero de estos dos puntos, el Canadá se ha esforzado por cumplir las obligaciones tanto expresas como implícitas que su calidad de Estado Miembro le impone. En efecto, nuestro Parlamento ha tomado las disposiciones legislativas necesarias, incluso la votación de un crédito de 20 millones de dólares para continuar las actividades de la UNRRA en materia de socorro internacional, después de la disolución de ese organismo. El Canadá cumplió asimismo su deber poniendo en práctica una resolución aprobada por una mayoría importante de la Asamblea y conforme a la Carta, aunque su delegación la combatió en vano cuando fué presentada.

Naturalmente no pretendemos tener méritos particulares por haber cumplido las obligaciones contraídas por nosotros al firmar la Carta de las Naciones Unidas. Esperamos que, como nosotros, los otros Miembros también tomen estas obligaciones en serio. Pero es con actos, y no con palabras, como los unos y los otros debemos demostrarlo. No es necesario decir más sobre este punto.

El Canadá cree igualmente que, al firmar la Carta, así como todos los otros Estados Miembros, aceptó la obligación de conciliar sus opiniones y su política relativas al bienestar nacional con las necesidades de la humanidad en general. En vista de ciertos sucesos recientes, tal vez no sea superfluo reafirmar esta obligación. Es imperativo que nos guiemos por el principio de que, a la larga, las medidas que más benefician a una nación son aquellas que benefician a todas las demás. Nos hemos comprometido a someter constantemente, en el plano nacional, tanto nuestra política interior como nuestra política exterior,

a un examen minucioso; a fin de estar seguros de poder ponerlas en armonía con los nobles fines perseguidos por esta Organización.

Mi segundo propósito es dar a conocer a Vds., en pocas palabras, la opinión de mi Gobierno respecto a la presente situación de nuestra Organización mundial. En vista de lo que ocurre en el Consejo de Seguridad; existe, tanto en mi país como en otros, el sentimiento de que las Naciones Unidas no están demostrando ser capaces de realizar su tarea principal, que consiste en favorecer el establecimiento de la confianza entre las naciones y en garantizar la seguridad nacional. El Consejo Económico y Social funciona en forma bastante satisfactoria. Los organismos especializados están haciendo un trabajo provechoso. Pero el Consejo de Seguridad, fundado sobre lo que se llama la unanimidad de los miembros permanentes, ha hecho poco para confirmar las esperanzas de quienes veían en él la clave de la estructura de la paz. Pero ha hecho mucho para aumentar los temores de quienes estimaban que el derecho de veto le impediría actuar con eficacia en una atmósfera internacional de temor y de desconfianza, en la que, a menudo, el orgullo se antepone a la paz, y la fuerza a la razón.

Si se continúa abusando del privilegio del veto, atacado y defendido con igual energía, se corre el peligro de destruir a las Naciones Unidas, porque se destruirá la confianza en la capacidad del Consejo de Seguridad para actuar en el campo internacional con eficacia y rapidez. Es necesario que no nos engañemos. No se puede esperar que nuestros pueblos acepten indefinidamente la intangibilidad de procedimientos y prácticas que, bajo el nombre de regla de la unanimidad, no hacen sino subrayar la desunión, y en virtud de los cuales la posibilidad de ponerse de acuerdo se reduce al mínimo común denominador de acción, que en la práctica con frecuencia no es más que la inacción. Por este motivo, la delegación del Canadá apoya vigorosamente la sugerencia de los Estados Unidos de América relativa al procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad.

Nuestra delegación apoya asimismo la propuesta de los Estados Unidos de América destinada a aumentar la eficacia de la Asamblea. Estimamos que su adopción infundiría nueva vitalidad y vigor a toda la Organización. Al concentrar nuestra atención sobre el papel esencial del Consejo de Seguridad, conviene no olvidar que la Asamblea, o una comisión permanente de la Asamblea, puede realizar numerosas labores cuya principal responsabilidad debía corresponderle al Consejo de Seguridad. Puede discutir una controversia o una situación en sus sesiones públicas y en sesiones privadas de comisiones restringidas. Puede proceder a una investigación, citando testigos y despachando comisiones investigadoras. Puede publicar las conclusiones de sus comisiones tan pronto el Consejo de Seguridad cese de ocuparse en una controversia o de una situación. Puede hacer recomendaciones y enviar esas recomendaciones al Consejo de Seguridad, o a las naciones interesadas, o a aquél y a éstas a la vez. La delegación del Canadá, no ve, pues, ninguna razón para no recurrir a estas funciones de la

Asamblea para la solución de problemas, cuando éstos no estén siendo resueltos en otra parte.

La realidad es que estos problemas deben resolverse y que los procedimientos y prácticas que impiden su solución deben ser cambiados. Esto puede hacerse por el voluntario abandono de esas prácticas; por medio de acuerdos o convenciones que las regulen, o, si es necesario, mediante la enmienda de la Carta. Esperamos que ningún miembro del Consejo de Seguridad desatenderá la opinión mundial claramente expresada obstinándose en impedir todo cambio, y asumiendo con ello la responsabilidad de debilitar y quizá destruir la Organización que es hoy la mayor esperanza de la humanidad respecto al porvenir.

Las naciones que buscan la paz y la cooperación no pueden aceptar y no aceptarán indefinidamente que permanezca intangible un Consejo que fué creado para garantizar su seguridad y que, según la opinión de muchos, se encuentra paralizado por discusiones estériles y dividido por disensiones. Si se ven obligadas a ello, es posible que busquen una seguridad mayor en una asociación de Estados democráticos y pacíficos, dispuestos a aceptar obligaciones internacionales más precisas a cambio de una seguridad nacional mejor garantizada. Ya se ha indicado que, si tales sociaciones son compatibles con los principios y propósitos de la Carta, pueden ser formadas dentro de la estructura de las Naciones Unidas.

Confiamos en que no será preciso recurrir a esta solución indeseable, a menos que se necesidad se imponga. Sin embargo, si esta solución se hace necesaria, deberá ser adoptada. No olvidemos que, en lo que respecta a las responsabilidades de los Estados Miembros, las disposiciones de la Carta constituyen el piso sobre el cual se asientan, y no el techo que las cubre. Si algunos prefieren descender más abajo de ese piso, ello no debe impedir a otros elevarse. En el edificio de la paz, indudablemente sería preferible que las naciones vivieran como una familia, en buena armonía, sin que estuvieran separadas por cortinas u otras piezas más importantes del mobiliario político. En todo caso, tales divisiones son preferibles al asilamiento en edificios enteramente separados.

Acaso Vds. digan que esto constituye un derrotismo de la peor especie. No es así. Es simplemente un criterio positivista. Sería insensato negar que ciertos sucesos de los últimos 12 meses han debilitado la posición de nuestra Organización. Sería insensato no admitir que si esa tendencia continuase, podría a la larga provocar su derrumbamiento.

La delegación, el Gobierno y el pueblo canadienses están resueltos a hacer todo lo posible para impedir esa trágica eventualidad. Nuestra fe y nuestra esperanza continúan alumbrándonos, siquiera sea a través de una niebla de inquietud. Confiamos en que la obra de esta Asamblea, a la cual nos comprometemos a contribuir, disipará esa inquietud, justificará esta fe y fortalecerá esta esperanza.

El PRESIDENTE (*traducido del francés*): Se levanta la sesión. Nos reuniremos esta tarde a las 15 horas.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.